

#10,00

**Donación de**  
**FLACSO - Sede Ecuador**

Revista de Ciencias Sociales  
FLACSO-Ecuador  
Publicación cuatrimestral  
No 19, mayo, 2004  
ISSN 13901249

Los artículos que se publican en la revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores, no reflejan necesariamente el pensamiento de ÍCONOS

**Director de Flacso-Ecuador**  
Fernando Carrión

**Director de ÍCONOS**  
Eduardo Kingman

**Editor de ÍCONOS**  
Edison Hurtado

**Consejo editorial**  
Felipe Burbano de Lara  
Mauro Cerbino  
Edison Hurtado  
Hugo Jácome  
Eduardo Kingman  
Carmen Martínez  
Franklin Ramírez  
Alicia Torres

**Coordinación del dossier**  
"Dolarización y desdolarización:  
elementos para el debate"  
Fander Falconí

**Producción**  
FLACSO-Ecuador

**Diseño**  
Antonio Mena

**Ilustraciones**  
Gonzalo Vargas  
Margarita Escribano  
Antonio Mena

**Impresión:**  
Rispergraf C.A.

FLACSO-Ecuador  
Ulpiano Páez N 19-26 y Av. Patria  
Teléfonos: 2232-029 / 030 /031  
Fax: 2566-139

E-mail: revistaiconos@flacso.org.ec

# Editorial

A partir de este número se reorganiza el equipo que hace Íconos. Luego de dar a luz a 18 números, el editor-fundador de la revista, Felipe Burbano, deja la dirección de Íconos -se mantiene en el consejo editorial- y da paso a un nuevo director, Eduardo Kingman, y a un nuevo editor, Edison Hurtado. Esta renovación se complementa con el ingreso de dos nuevos miembros al consejo editorial, Carmen Martínez y Hugo Jácome. Con esta renovación del equipo también se renuevan los esfuerzos y los compromisos de la revista con la comunidad académica ecuatoriana y latinoamericana.

Quizás el único cambio introducido por la nueva dirección de la revista sea que a partir de ahora Íconos incluye un editorial. Esto no significa que, incluso desde el nacimiento de la revista, no se hayan dado modificaciones, sino que los cambios han sido concebidos de manera gradual como resultado del análisis del diseño, los contenidos y el sentido mismo de la publicación; algo que mantendremos en esta nueva etapa. Si se examina la revista desde el comienzo hasta sus últimos números, se podrá apreciar el esfuerzo de sus integrantes por construir una revista de ciencias sociales. ¿Pero qué significa construir una revista de este tipo? ¿Cuáles son sus cometidos? ¿A quién ha de dirigirse? Una revista es el resultado no sólo de la acción de un equipo de colaboradores, sino de su relación con un campo teórico-práctico y con un grupo de lectores. Todo esto supone un proceso de evaluación continuo.

Al decir que se trata de una revista de ciencias sociales de alguna manera estamos señalando un público. Por el momento diremos que nos interesa contribuir a crear un espacio de reflexión sobre lo social desde un campo específico: el de las ciencias sociales. Aparentemente, esto dice poco, pero en realidad marca un lugar, una perspectiva, una forma de análisis. Lo que hemos buscado desde un inicio es ampliar el campo de discusión de las ciencias sociales; incorporar los trabajos del mayor número posible de científicos, sin guiarnos por otro criterio de selección que no sea la calidad; convertir a la revista en un referente, un punto de apoyo en el proceso de constitución de un campo; algo nada fácil de lograr.

Las ciencias sociales son fundamentales para orientar los procesos de mejoramiento de la vida social, pero se encuentran en gran medida institucionalizadas, orientadas a la producción de informes, labores de consultoría, mientras que son cada vez menos las instancias dedicadas a la generación de pensamiento. Una expresión de esto es el que muchas veces los científicos nos dejemos llevar por la urgencia y por requerimientos externos. El pensamiento de lo social, por el contrario, requiere de independencia, lo que no debe confundirse con indolencia, y ha de responder a su propio ritmo, condiciones, canales de legitimación.

Nos inquieta, además, la ausencia de espacios de reflexión, comunicación y debate en el Ecuador. Buena parte de quienes tienen interés por desarrollar un pensamiento sobre lo social se encuentran aislados, sin oportunidades de discutir, de compartir ideas o preocupaciones. En el Ecuador no se debate pero lo que es más grave aún, no existen espacios para el debate. Los espacios para reflexionar, producir un texto, discutirlo, son cada vez más limitados; no obstante, existe una necesidad creciente de que se produzca un cambio, de que se pueda retomar el sentido creativo y crítico del pensamiento.

Nuestra necesidad ha sido entender el funcionamiento del país y de la vida social, pero al mismo tiempo nos hemos interesado en introducir una perspectiva regional. El Ecuador no puede entenderse fuera del mundo, pero además mucho de lo que nos compete tiene que ver con los Andes en su conjunto, con América Latina y el mundo. Gran parte de lo que nos sucede internamente se define en el exterior e incluso fuera de cualquier espacio determinado o determinable. Nuestra perspectiva de análisis ha de ser, en ese sentido, cada vez más comparativa e integradora.

Íconos se ha convertido, poco a poco, en una necesidad. Muchos de sus artículos son citados y sirven de base para la discusión, al igual que otras revistas (en realidad son muy pocas en este campo) como Ecuador Debate. El sólo hecho de escribir para la revista ha permitido que muchos de nosotros salgamos del aislamiento. Estamos interesados en incorporar a nuevos investigadores a participar en ella. Queremos seguir produciendo una revista en la que la calidad sea la norma. Una revista que esté en condiciones de contribuir al desarrollo de formas de pensamiento crítico y que esté abierta al debate entre distintas orientaciones y tendencias de análisis.

Eduardo Kingman Garcés  
Director de Íconos

# Indice

Coyuntura

---

8

**Violencia:  
peligros autoritarios y desafíos democráticos**

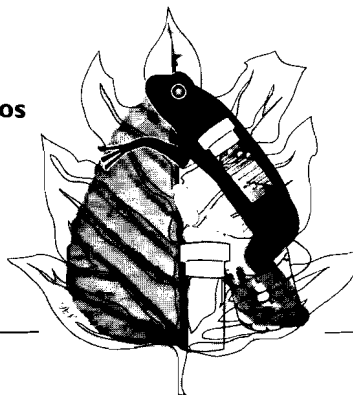
Augusto Barrera Guarderas

13

**Recursos genéticos, conocimientos  
tradicionales y propiedad  
intelectual:**

**piezas claves en los TLC**

María Fernanda Espinosa



Dossier

---

22

**Dolarización y desdolarización:  
elementos para el debate**

Introducción al Dossier

Fander Falconi

25

**Auge y derrumbe de la convertibilidad argentina:  
lecciones para Ecuador**

Saúl Keifman

35

**América Latina:  
buscando el rumbo perdido**

Carlos Parodi Trece

43

**Dolarización y desarrollo humano en Ecuador**

Carlos Larrea M.

54

**Dolarización o desdolarización  
¿esa no es toda la cuestión!**

Alberto Acosta

66

**Costos del abandono de la dolarización  
en Ecuador**

Marco P. Naranjo Chinboga

71

**El dólar vale más**

Una reflexión sobre dinero, Estado e identidad

Emilia Ferraro

80

**La construcción social y cultural de la música**

Comentarios al dossier de Íconos 18

*Hernán Ibarra*



87

**La identidad colectiva y el proceso de modernización:**

entre coerciones universalistas y valores particularistas

*H. C. F. Mansilla*

Diálogo

---

100

**Otra globalización es posible**

Diálogo con Boaventura de Sousa Santos

*Fernando García y Miguel Chavarría*

Temas

---

114

**Es la lógica algo obsoleto?**

Un análisis de los acuerdos sobre la base de Manta

*Teodoro Bustamante*

124

Sin el Fondo, ¿quién estará fuera del mundo?

**Teoría y práctica de la intervención del FMI en América Latina**

*Francesco Martone*



132

**Elaborando el silencio: la respuesta de Sor Juana Inés de la Cruz**

*Mercedes Prieto*

Frontera

---

137

**La provocadora soledad de la teoría**

A propósito de la herencia intelectual de Norberto Bobbio

*Julio Echeverría*

141

**Las búsquedas de Norbert Lechner**

*Felipe Burbano de Lara*

148

Reseñas

# Violencia, peligros autoritarios y desafíos democráticos<sup>1</sup>

Augusto Barrera Guarderas<sup>2</sup>

Entre septiembre de 2003 y mediados de marzo -en que se escribe este texto-, han ocurrido una serie de amenazas y hechos de violencia inusuales en el país. Hasta hoy la mayoría de ellos permanecen envueltos en el misterio y la oscuridad. Empero, tanto el contexto político como la sucesión y características de algunos de estos episodios, han abierto motivos para que la sociedad ecuatoriana se pregunte si esta situación es atribuible a los mismos autores intelectuales y, si es así, ¿cuáles son sus propósitos?

En la versión del Gobierno no existe ninguna relación entre estos sucesos. Se ha mencionado que el asesinato de Patricio Campaña y el atentado a Carlos Muñoz tendrían móviles específicos no atribuibles a ninguna intención política. Ha descartado además su responsabilidad en las intimidaciones a varios periodistas. En cambio, el ataque a Leonidas Iza y sus familiares, el robo a la sede de Pachakutik y el intento de robo al local de la Izquierda Democrática, así como las agresiones

Barrera, Augusto, 2004, "Violencia, peligros autoritarios y desafíos democráticos", en ICONOS No.19, Flaco-Ecuador, Quito, pp. 8-12.

- 1 Texto elaborado para la Revista Iconos. El contenido recoge parcialmente la intervención en el panel "Estrategias democráticas y peligros autoritarios", organizado por el Grupo Articulación Democrática en marzo de 2004.
- 2 Politólogo, profesor universitario y miembro del Foro Urbano y del Grupo Articulación Democrática.

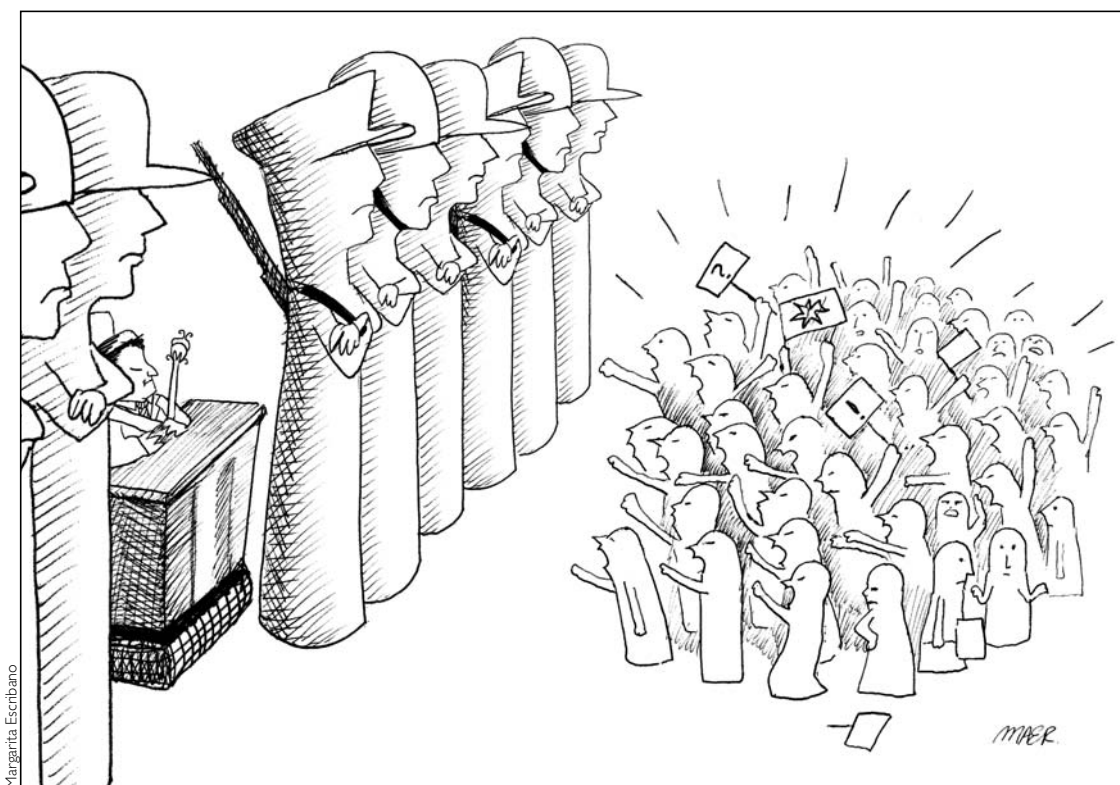
a miembros y oficinas del TSE, son hechos que están hasta hoy en el misterio, sin pistas claras ni explicaciones convincentes.

En este tipo de violencia se pone en juego la dimensión político simbólica, tanto en el contexto en el que ocurren los hechos, como en los efectos que ellos acarrearán. Bajo esta óptica, este artículo explora algunas aristas implicadas en estos episodios. No se trata de hacer una especulación policial ni mucho menos acusar temerariamente, sí en cambio, evidenciar algunas tendencias preocupantes de deterioro de la precaria democracia ecuatoriana.

## Un ambiente enrarecido

Asumiendo en principio la veracidad de la versión oficial, no dejó de provocar sospechas el que las personas e instituciones agraviadas mantengan confrontaciones con el gobierno. El presidente Gutiérrez ha mantenido agrios intercambios verbales con algunos movimientos sociales, con un sector de la CONAIE y Pachakutik y con la ID. Es además público que hay temas pendientes con el TSE cuyo tratamiento, en especial el financiamiento ilegal de la campaña presidencial, puede conducir a graves implicaciones. En ambos casos hay, más que escaramuzas, un tinglado de enfrentamiento político establecido y profundo.

El gobierno del PSP ha desplegado una "política" muy cuidadosa -mucho más que en casi todos los ámbitos de acción- de debilitamiento del movimiento indígena a través del



uso de tres tipos de recursos: a) la negociación local y provincial de pequeñas parcelas de presupuesto y poder con dirigentes y pseudo dirigentes indígenas en un contexto organizativo matizado por intereses y conflictos<sup>3</sup>, b) la persistencia de las visitas y ofrecimientos a las comunidades de la sierra, con o sin picos y palas, con el manifiesto propósito de socavar la base de las organizaciones sociales opositoras y, a la vez, levantar sus propios cuadros organizativos y eventualmente electorales, c) el atemorizamiento selectivo evidenciado en hechos como la detención del presidente de Ecuarrunari, la tristemente célebre lista de “enemigos del gobierno”, o las intimidatorias declaraciones de miembros de PSP en los días cercanos al 21 de enero. A lo interno, esta estrategia se completa con el reavivamiento de un discurso indigenista y excluyente que aísla al movimiento.

En el frente con la ID, el gobierno ha exhibido una particular virulencia alrededor de la acusación y el levantamiento de la inmunidad al diputado Haro. Más allá de la veraci-

dad y estilo de las denuncias y las réplicas, hay por lo menos tres intenciones socialpatrióticas en esa confrontación: a) la disputa la base electoral y social serrana con la ID, intención que, dicho sea de paso, es vista con simpatía por el PSC; b) la organización de un bloque político institucional inusual alrededor de las denuncias de tráfico de armas; las FFAA, el PSC y el gobierno podrían encarar al unísono al mismo adversario y el Presidente, al fin, lideraba una “iniciativa política” con sus fuerzas de apoyo; c) fue ocasión propicia para intentar convalecer las relaciones con las FFAA que lucían deterioradas.

### Hipótesis y actores racionales

En este terreno de confrontación, los episodios de violencia han adquirido un particular relieve y, de hecho, han provocado que los agraviados responsabilicen al Gobierno por lo sucedido. Ahora bien, se puede inculpar al gobierno de varias formas. Al menos dos.

La una se refiere genéricamente a la exigencia del cumplimiento del deber constitu-

<sup>3</sup> De hecho, la cercanía política de la dirigencia de algunas organizaciones de la CONAIE a este gobierno ha provocado tensiones al interior de Pachakutik.

cional y legal de las autoridades por precautelar la seguridad y mantener un razonable clima de convivencia. En cierto modo, todo gobierno es responsable de precautelar la paz pública y rendir cuentas sobre su alteración. La imputación de esta responsabilidad, incluida la exigencia por la aclaración exhaustiva de los responsables y móviles de los episodios de violencia parece ser obvia, necesaria, razonable y legítima.

Más polémico resulta el otro significado de la inculpación. Supondría un grado de participación de algún sector gubernamental en la autoría o encubrimiento de estos hechos. Algunos ojos volvieron su mirada a los círculos de partido presidencial. La combinación de un carácter cuasi policial con la iracundia política compone una mezcla peligrosa. Sin embargo, si se trata de mirar los efectos de los episodios de violencia, en lugar de afectar al adversario o debilitar su capacidad de acción, en lo inmediato el resultado es exactamente el inverso. La opinión pública procesó los hechos como una causa de simpatía con las víctimas y de sospecha al gobierno. Es más, el ataque al presidente de la CONAIE parecía provocar la reactivación de la agitación social parecida a la vivida entre diciembre y enero. En lógica estricta, el efecto de corto plazo fue atizar el fuego y profundizar la inestabilidad. A partir del presupuesto de que se trata de actores racionales, no parece plausible la hipótesis de que la lógica que guíe estas acciones sea la de un gobierno golpeando a la oposición.

Un horizonte de más largo plazo, en cambio, puede abrir otras interpretaciones. La reacción de la CONAIE de precipitar la movilización del 16 de febrero avalaría la hipótesis de que se trataba de actualizar un clima de enfrentamiento. A juzgar por la poca contundencia de esas movilizaciones (con la excepción de paro de Cotopaxi), el pretendido propósito podría ser desgastar a la organización, provocándola.

Otra hipotética causa, que sólo pudiera entenderse en un ciclo más largo, está relacionada con la intención de “violentizar” la

vida política del país. Hasta hoy y más allá de los grados de beligerancia social, la matriz del conflicto gobierno-oposición popular se ha mantenido bajo un marco mínimo de un estado de derecho; esto es, la fuerza pública ha mantenido el monopolio de la coerción y correspondientemente la responsabilidad política y ética de las acciones represivas y, al mismo tiempo, los grupos sociales no han desarrollado formas de violencia insurgente. Incluso en algunos casos se han acordado los marcos de la protesta. El tipo de violencia implícito en estos hechos -selectiva, anónima y ruin- disuelve todo esquema de responsabilidades y de allí su potencial devastador; coloca al país al inicio de una espiral marcada por la proliferación de actores y acciones violentas con el consiguiente efecto esterilizador del miedo.

### **Paradojas: debilitamiento del Estado y peligros autoritarios**

Una arista sumamente preocupante que se desprende del razonamiento anterior es la legitimación de un progresivo proceso de “militarización” o “policialización” política e institucional. Este gobierno ha colocado a las FFAA en el centro del debate político. Es de suponer que la procedencia militar del Presidente, así como de varios altos funcionarios, provoque una asociación entre las FFAA y este gobierno en particular. Sin embargo, y en rigor, los vínculos no deberían ser diferentes que en otros casos. El partido de gobierno es Sociedad Patriótica y no las FFAA.

Cabe por tanto seguir con acuciosidad las estrategias que han puesto a la institución armada en el andarivel político: como se señaló anteriormente, el errático manejo del caso de las armas y los cabildeos con partidos políticos para enjuiciar a un diputado, los nombramientos de cerca de un centenar de militares en responsabilidades administrativas en áreas altamente sensibles como la energía y las aduanas, que contagia de una corresponsabilidad política a la institución castrense.

A ello hay que sumar otros signos evidentes en la cúpula de Carondelet. La aversión que pueden producir afirmaciones como “este es un gobierno de coroneles” o “nos vamos a quedar veinte años”, pronto se convierte en temor fundado cuando quien lo ha dicho, en este caso un ciudadano sin ningún cargo público, está en capacidad de inmiscuir recursos y jefes policiales en sus actividades particulares, o más, de tener a su diestra al mismísimo Presidente como auspiciante de sus acciones proelitistas. La capacidad de distinguir entre lo público y lo privado (llámense parientes, colegas, amigos o influencias) es un aspecto fundante –para no usar el término elemental- de la ética de la gestión pública que está siendo olvidado.

Finalmente, aunque el Presidente de la República ha restado importancia al documento al que él mismo se ha referido como la “propuesta de reforma política”, la proposición de temas como la reelección presidencial inmediata o la facultad de disolver el Congreso en el mismo paquete que el voto de los militares en servicio activo, establece una dirección hacia un régimen hiperpresidencialista con tintes autoritarios.

Hay, en suma, actores, intenciones y racionalidades que pueden nuclearse en torno a un camino de mayor estrechamiento de la democracia. La debilidad política del Gobierno es, paradójicamente, un factor de riesgo dada su necesidad de arrimarse a poderes fácticos y entregarles aún más capacidad de decisión. Sería el peor encadenamiento de los hechos de violencia con peligros autoritarios.

## Desafíos democráticos

El optimismo con el cual los politólogos institucionalistas predecían un camino lineal hacia la consolidación de las democracias en América Latina, se ha disuelto sistemáticamente hasta ser reemplazado por una gran incertidumbre sobre el futuro de los regímenes políticos.

En contra del fundamento de la legitimidad democrática por la cual “el otorgamiento

de la autoridad para ejercer el poder del Estado debe emerger de las decisiones colectivas de los miembros de una sociedad”<sup>4</sup>, la realidad nos muestra que los estados se debilitan hasta relativizar la noción de soberanía, que las asimetrías sociales se profundizan al punto de romper un umbral mínimo de pertenencia e inclusión, que los poderes fácticos sustituyen a golpes de mano la soberanía popular por los intereses de grupos de presión.

El vaciamiento de la capacidad deliberativa y electiva de la democracia es una condición de la dominación y de la desconstitución de posibilidades emancipadoras de las sociedades. La democracia vaciada refuerza la lógica perversa de la negociación fragmentada con grupos de interés, el reinado de un corporativismo excluyente y el imperio de clientelas políticas en el patrón más tradicional. La supuesta modernización neoliberal ha encubierto una tremenda involución en la construcción de las instituciones y en las prácticas políticas.

La expresión institucional -efecto, condición y causa circular- del envilecimiento de la democracia es un Estado débil, corrupto e incapaz. Este descalabro del régimen ha adoptado varias formas en América Latina. Los ribetes dictatoriales de Fujimori, el bloqueo venezolano, las revueltas sociales en Bolivia y Ecuador seguidas de recambios en los presi-

*Hay actores, intenciones y racionalidades que pueden nuclearse en torno a un camino de mayor estrechamiento de la democracia. La debilidad política del Gobierno es, paradójicamente, un factor de riesgo dada su necesidad de arrimarse a poderes fácticos y entregarles aún más capacidad de decisión.*



4 Cohen, Joshua, 2000, “Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa”, en *Revista Metapolítica* Vol. 4, No. 14, abril/junio, México, p. 24.





Margarita Escribano

dentes, el descalabro del gobierno radical en Argentina. En varios de estos casos, las FFAA aparecen como un actor no sólo dirimente - de algún modo siempre tuvieron un rol tutelar-, sino incluso como un factor estructurador de las fuerzas y escenarios políticos y sociales.

Aunque este nuevo rol institucional tiene características diferentes al desempeñado en la década de los setenta, ocurre nuevamente en medio del agotamiento de los modelos políticos y económicos dominantes, de la redefinición de los alcances de los estados nacionales, de grados diversos de deslegitimación de los partidos políticos y de la emergencia de fuertes actores sociales contrahegemónicos que, si bien pueden confrontar el orden caduco, no tienen aún la fuerza y amplitud para edificar un nuevo régimen. Es precisamente en este terreno en que las FFAA pueden estar tentadas a sustituir los roles de la sociedad y del conjunto del Estado. No parece razonable

abonar en ese camino. Al contrario, cabría impulsar la demanda por la preservación institucional de las FFAA y la toma de distancia del conflicto propiamente político. Si eso no es claro para el partido de gobierno, lo debería ser para la institución.

Pero más allá de eso, lo de fondo sigue siendo la necesidad de construir condiciones sociales y políticas para impulsar, como mínimo, un proyecto nacional y democrático. Ese desafío democrático en este momento “no puede apoyarse en los hábitos establecidos y normas reconocidas por todos. No se trata de restaurar normas regulatorias sino de crear aquellas constitutivas de la actividad política: la transición exige la elaboración de una nueva gramática”<sup>5</sup>. Una nueva gramática sólo será viable en tanto destruye los mecanismos de exclusión económica, social y cultural.

En esa perspectiva parecen visibles algunos ejes de acción política inmediata: a) la consolidación, afianzamiento y extensión de una cultura política democrática y la oposición radical e intransigente contra todo asomo de autoritarismo; b) la articulación de un conjunto de elementos de agenda básica que refleje, al menos, mínimos acuerdos; c) el establecimiento de mecanismos concretos de coordinación del campo democrático y progresista, a partir de los cuales puedan impulsarse posiciones de vigilancia, exigencia, propuesta o veto.

Marzo 2004

5 Lechner, Norbert, 1988, *Los patios interiores de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, p. 32.